



San Salvador, 20 de agosto de 2018

**PRONUNCIAMIENTO DE LA SEÑORA PROCURADORA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS,  
LICENCIADA RAQUEL CABALLERO DE GUEVARA, ANTE LAS REFORMAS A LA LEY PENITENCIARIA  
APROBADAS EN SESIÓN PLENARIA DE ASAMBLEA LEGISLATIVA, EL 16 DE AGOSTO DE 2018**

En mi calidad de Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, ante la opinión pública, hago saber:

1. Debo aclarar, primeramente, que comparto la preocupación de la ciudadanía en general por la grave situación de inseguridad que provocan los grupos delincuenciales que causan dolor y luto, al mantener en zozobra a las personas que intentan ganarse la vida de forma honrada.
2. Sin embargo, también es cierta nuestra pretensión de vivir en un estado de derecho; y en razón de ello, cumpliendo mi mandato constitucional, presenté el pasado 24 de julio a la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa, mis observaciones a la propuesta de reformas a la Ley Penitenciaria, presentada por el señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública.
3. Entre las observaciones señalé la necesidad de mantener el control judicial en las decisiones administrativas que pudiesen afectar o restringir derechos de la población privada de libertad, para imponer límite temporal a las restricciones de derechos; y que tales restricciones se ajusten a procedimientos respetuosos de derechos humanos, por la necesidad de impedir que la ausencia de condiciones materiales comporte afectaciones masivas de derechos humanos. En otras palabras, es necesario que las restricciones a derechos se hagan atendiendo a criterios de temporalidad, necesidad, legitimidad y proporcionalidad entre otros. También destaqué la obligatoriedad de garantizar el derecho a la defensa material, ya que el pretender realizarla de forma diferida, atenta contra derechos humanos y fundamentales.
4. No obstante lo anterior, debo manifestar que apoyé algunas medidas propuestas, encaminadas a restringir y controlar la información y las comunicaciones que se sostienen desde y hacia las cárceles; así como las medidas que favorecen la clasificación y el trato de internos atendiendo a su peligrosidad, y a la gravedad de sus delitos, siempre que sea de forma respetuosa a sus derechos.
5. En ese contexto, designé al licenciado Carlos Enrique Rodríguez, Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos Civiles, Individuales y Políticos, y al licenciado Francisco Hernández, jefe del Departamento de Verificación Penitenciaria de PDDH, para que integren un equipo interinstitucional, con carácter técnico, que discutiese las propuestas de reforma y las observaciones que realicé en su momento.
6. Dicho equipo sesionó en una sola ocasión el día veinticinco de julio pasado y se lograron acuerdos en la redacción de algunas reformas, sin embargo, ello no fue posible en otras propuestas, ya que a criterio de mi equipo de trabajo de PDDH presente, y tal como antes había expresado en mi opinión, estas afectarían derechos humanos y fundamentales, y por tanto, no debían ser incluidas.
7. El documento producido por el equipo técnico interinstitucional, que contenía los acuerdos que se alcanzaron y los puntos sobre los que tal meta no fue posible, entendimos que debía ser discutido nuevamente por la Comisión Legislativa referida, sin embargo, a esa reunión de la Comisión NO FUI NUEVAMENTE CONVOCADA, tal como lo hice ver en su momento.
8. Por información publicada en medios de comunicación tuve conocimiento que la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad emitió dictamen favorable a estas propuestas de reformas y que luego de su conocimiento por el pleno legislativo, retornó a la Comisión para que se continuara discutiendo.
9. Al parecer –ya que no fui informada oficialmente de ello- dicha Comisión legislativa sostuvo una reunión con algunos jueces que, a su vez, expresaron su opinión e introdujeron nuevos cambios en las propuestas de reformas, los que tampoco se hicieron de mi conocimiento.



San Salvador, 20 de agosto de 2018

10. Así las cosas, el pasado dieciséis de agosto, la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad emitió nuevamente un dictamen favorable a la propuesta de reformas a la Ley Penitenciaria y, en el mismo, se dispuso que el documento había sido consensuado por el equipo técnico interinstitucional, siendo esta afirmación, como ya se dijo, absolutamente inexacto, ya que no solo debían superarse algunas observaciones realizadas por mi persona y por mi equipo técnico, sino que tampoco fui incluida en las últimas discusiones de las referidas propuestas. Sin conocer las intenciones, se hizo saber que sí estuve presente, junto a mí equipo técnico.
11. Reitero mi estricta condena contra las acciones delictivas que tienden a debilitar el tejido social del país; reconozco que la actividad delincuencia atribuable a maras o pandillas golpea fuertemente a nuestra sociedad y reprocho completamente la forma en que estos grupos lesionan grandemente las garantías fundamentales de la población. Sin embargo no se debe dejar de lado que, en un Estado de Derecho, toda la actividad estatal prioritariamente estará ceñida al deber de respeto y garantía de derechos humanos.
12. Comparto la imperante necesidad de impedir que se sigan ordenando crímenes desde el interior de las cárceles y comprendo que para ello deben fortalecerse estructuras penitenciarias, los controles e imponerse algunas restricciones. Pero lo anterior no implica que se evadan los deberes que al Estado, en su posición de custodio de personas privadas de libertad, le atañen; sin lo cual resultaría imposible el logro de los fines esenciales de la pena privativa de libertad.
13. **Aclaro de forma contundente**, que las reformas a la Ley Penitenciaria aprobadas mediante Dictamen 06 del pasado 14 de agosto, por la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad no gozan enteramente de mi aval, como fue recientemente expresado por algunos diputados; y en el mismo Decreto aprobado lo citan, y que, ni mi persona, ni mi equipo técnico hemos participado de las últimas discusiones en el seno de la referida Comisión ni en las modificaciones finales al documento en cuestión.
14. Algunas de las reformas aprobadas restringen de manera general, indeterminada temporalmente e ilimitada, algunos derechos humanos fundamentales y obstaculizan, de forma inapropiada, el ejercicio de otros derechos. Además, agravan con más restricciones los derechos de personas privadas de libertad, y de sus familiares, que aquellas que les fueron impuestas por la pena o medidas determinadas en su proceso, por la correspondiente autoridad judicial. Las referidas reformas contradicen los principios de Humanidad e Igualdad, y de Afectación Mínima, previstos en el art. 8 de la Ley Penitenciaria que se pretende reformar.
15. En tal sentido, **hago un público llamado al señor Presidente de la República**, para que junto a su equipo técnico, haga un minucioso estudio de las reformas a esta Ley Penitenciaria; y que, habiendo constatado las potenciales violaciones a derechos humanos y fundamentales, acá expresadas, **VETE** el referido decreto, formulando las observaciones correspondientes y devuelva el mismo a la Honorable Asamblea Legislativa, para un nuevo análisis y/o decisión definitiva. He remitido además al referido funcionario el documento completo conteniendo mi opinión sobre las mencionadas reformas.

**Licenciada Raquel Caballero de Guevara**  
**Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos**